

ban y José Hernandez, Pablo Mendoza, José Cristóbal, Florentino Canton, Francisco Vazquez, Casimiro y Macario Santos, contra la resolución del C. Gefe político de Villa Álvarez, que los condenó á muerte por los delitos de asalto y robo, en la casa del C. Nicolás Méndez, de la hacienda de Mejía, por haber violado la garantía del art. 29 de la Constitución general. 29 La Justicia de la Unión no amparará ni protege á los mencionados reos, ni contra la resolución referida del Gefe político de Villa Álvarez, ni contra la ley de 23 de Mayo, repetida, por la que fueron juzgados, por no haber garantía individual violada.

Devuélvanse las actuaciones al juez de Distrito que las elevó, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Febrero 14 de 1873.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas, por el C. Leonardo Pérez, á nombre de su hermano Luciano Pérez, contra el Presidente municipal de Altamira, que consignó á Luciano al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El fiscal dice: que Leonardo Pérez, á

nombre de su hermano Luciano, pide á vd. amparo, contra la providencia que tomó el C. Presidente del Ayuntamiento de Altamira, consignando á dicho Luciano al servicio de las armas. Se llamó á este para que dijera si ratificaba el escrito que presentó Leonardo, y lo ratificó. Se requirió al ciudadano comandante militar de esta plaza, para que no diera de alta al repetido Luciano, entre tanto que concluía este juicio, y contestó que ya había sido *pasado por cajas*. Se pidió informe á la autoridad de Altamira, y contestó mandando varias declaraciones tomadas ante aquél Juzgado, por las cuales aparece que el solicitante es ladrón de bestias.

El fiscal está porque se castigue rigurosamente el abigeato; pero en el caso presente ni puede llamarse castigo á esa consignación al servicio de las armas, ni se ha aplicado como debia aplicarse; previa sentencia formal. Además, el art. 185 de la ley de procedimientos del Estado, previene que "ningun reo sentenciado por ladrón pueda ser destinado al servicio de las armas." Luciano Pérez, en primer lugar, no ha sido sentenciado, como antes se dijo, y en segundo lugar, suponiendo que lo hubiese sido, no podría serlo destinándolo á la milicia.

Así es, que ha habido por parte de la autoridad de Altamira violación flagrante de una ley del Estado, y con ella, violación de varias de las garantías individuales, reconocidas por la Constitución general.

Por lo cual, el fiscal pide á vd., conceda á Luciano Pérez el amparo que ha solicitado, expresando en su sentencia, si lo creyere conveniente, que él no importa juicio ninguno sobre los delitos que haya cometido el solicitante, por los que, debe quedar sujeto á la autoridad local respectiva.

Tampico, Octubre 12 de 1872.—*Lic. Modesto Ortiz*.

Es copia fiel y exacta del original que certifico, en Tampico de Tamaulipas, á los diez y ocho días del mes de Diciembre de mil ochocientos setenta y dos; de que testificamos.—*R. Rosales.*—De asistencia.—*Manuel J. Solórzano.*—De asistencia.—*M. Trasierra.*

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

Tampico, Noviembre 9 de 1872.—Visto el presente juicio de amparo promovido ante este Juzgado por el C. Leonardo Perez, vecino de Altamira, á nombre de su hermano Luciano Perez, quien se queja de haberse violado en su persona la garantía que otorga el art. 5º de la Constitución, consignándosele al servicio de las armas en el batallón núm. 2, por el C. Presidente del Ayuntamiento de aquel lugar, y en él, la petición del quejoso, el auto de 20 de Setiembre mandando suspender el acto reclamado, en que se dispone no se le dé de alta, para lo que fué librada atenta comunicación al ciudadano comandante militar de esta plaza; su contestación en que manifiesta que el día doce del propio mes fué pasado por cajas; el informe rendido por el C. Presidente del Ayuntamiento con las constancias que acompañó; la respuesta del C. Promotor fiscal; el auto en que se recibió este negocio á prueba; lo expuesto por las partes; el auto de citación para sentencia, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que del informe del C. Presidente del Y. Ayuntamiento de Altamira; aparece: no haber recaído sentencia formal sobre el delito de abigeato cometido por el C. Luciano Perez, y únicamente que por este motivo fué consignado al servicio de las armas, mediante solo una averiguación que al efecto fué practicada, sin que fuese sujetado á

su juez competente, ó sea al juez de letras que debía conocer, según la ley de procedimientos del Estado; que en ambos casos no ha sido pronunciada sentencia que le condenara á la pena expresada, pues aun en el supuesto de que lo hubiera sido, esa ley en su art. 185 previene que "ningun reo sentenciado por ladrón, pueda ser condenado al servicio de las armas," por cuyo fundamento legal, se ha infringido no solo aquella, sino también ha habido violación de las garantías individuales que reconoce la Constitución general en su art. 5º.

Considerando: que si el referido Luciano Perez ha dado motivo para proceder contra él por un delito común, como el abigeato de que se le acusa, no hay razón de parte del C. Presidente del Ayuntamiento para consignarle al servicio de las armas, menos aún, cuando la aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial, como está consignado en el art. 21 de la Constitución, en cuyo caso, la autoridad municipal ha sido hasta incompetente para imponerla á Luciano Perez.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, la Justicia de la Unión debía declarar y declara:

1º Que ampara y protege á Luciano Perez, contra el acto que motivó la interposición de este recurso.

2º Que la anterior declaración no importa juicio ninguno sobre los delitos que Perez haya cometido, y por los cuales deberá quedar sujeto á su juez competente, y

3º Que no habiéndose obsequiado por la comandancia militar de esta plaza el auto de 20 de Setiembre último, que previno la suspensión del acto reclamado, por la razón expuesta en la nota del C. Jefe de la guarnición de ella, se dirija oficio al C. Ministro de la Guerra

y copia certificada de la misma y del auto referido, para que el expresado Luciano Perez sea dado de baja.

Hágase saber, y sacándose las copias de estilo para el "Diario Oficial" y "Semanario Judicial de la Federación," envíense estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su correspondiente revision.

Así definitivamente juzgando lo decretó y firmó el C. Lic. Ramon Rosales, juez de Distrito del Estado de Tamaulipas, actuando por receptoría á falta del escribano.—*R. Rosales.*—Asistencia.—*Manuel Solórzano.*—Asistencia.—*M. Trasierra.*

Es copia fiel y exacta del original, que certifico en Tampico de Tamaulipas á los diez y ocho días del mes de Diciembre de mil ochocientos setenta y dos; de que testificamos.—*R. Rosales.*—Asistencia.—*M. J. Solórzano.*—Asistencia.—*M. Trasierra.*

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 4 de 1873.—Visto el juicio de amparo que en 13 de Setiembre de 1872, promovió en Tampico, ante el juez de Distrito del Estado de Tamaulipas, Leonardo Perez, por su hermano Luciano del mismo apellido, quejándose de que el Presidente municipal de Altamira habia condenado á su representado, reputándole ladrón y vago, al servicio militar en el segundo batallón de línea, con violacion de las garantías que otorgan los arts. 13 y 20 de la Constitucion federal. Visto el informe del Presidente del Ayuntamiento de Altamira, exponiendo: que determinó consignar al ejército al quejoso como reo de robo de animales, y acompañando en comprobacion de los delitos imputados una informacion levantada ante el alcal-

de primero de la citada Villa. Vistos los pedimentos del Promotor fiscal y todas las demas constancias de autos.

Considerando: 1º que la consignacion de Luciano Perez al servicio militar hecha por el Presidente municipal de Altamira, en calidad de pena como reo de abigeato, es contraria á las disposiciones de las leyes, porque segun estas, el servicio de las armas no es pena, porque la aplicacion de esta, es exclusiva de la autoridad judicial, y porque la municipal no tiene ese carácter, debiendo seguirse en casos como el presente, á poner al acusado á disposicion del juez respectivo en la forma debida. 2º Que si bien la consignacion que se viene considerando funda el amparo que pretende el quejoso, á virtud de que siendo aquella ilegal, resulta que este es soldado contra su consentimiento, sin motivo justo que le imponga tal obligacion, no es legal que el mismo quejoso en su calidad de acusado de delitos del orden común quede sin responsabilidad dejando de sujetarse al juicio correspondiente ante el juez que por derecho deba conocer.

Por los fundamentos expuestos, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo que sigue: 1º se confirma la sentencia pronunciada por el juez de Distrito del Estado de Tamaulipas, en Tampico, á 9 de Noviembre del año próximo anterior, por la cual declara: "que la Justicia de la Union ampara y protege á Luciano Perez, contra el acto que motivó la interposicion de su recurso. 2º Con las formalidades que corresponden, póngase al propio Luciano Perez á disposicion de su juez competente, por la responsabilidad que le resulta, como acusado de los delitos que se le imputan.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de donde proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Febrero 12 de 1873.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por el C. Agustín Olivera, contra el C. Gefe político del Distrito de Tlacolula, que le consignó al servicio militar.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que ha visto con detenimiento y reflexion, la solicitud de amparo formulada por Agustín Olivera, de Tlacolula, consignado al 5º batallon de línea, por el C. Gefe político de aquel Distrito.

Es fuera de toda duda, que la ley de 17 de Mayo último, estableció como requisito previo para que alguno fuera consignado al servicio de las armas contra su voluntad, la calificación de una junta presidida por el síndico del ayuntamiento respectivo, y compuesta de cuatro personas nombradas por esta corporacion.

Existe la calificación hecha respecto del quejoso; pero consta que los cuatro individuos de la junta, fueron nombrados por el presidente municipal y no por el ayuntamiento de Tlacolula, segun lo justifica la copia auténtica del acta y comunicacion que presentó el peticionario como prueba.

Una vez que la junta no tuvo origen legal, sus actos no tienen validez; y tanto importa que Agustín Olivera haya sido calificado por una junta de ilegal procedencia, como que no se le hubiera calificado de ninguna manera.

La garantía otorgada por la parte primera del art. 5º de la Constitución Federal, no fué suspensa sino en los casos y previos los requisitos marcados por la ley citada de 17 de Mayo del corriente año. Si lo prescrito por la ley no se ha observado, es claro que no puede ella invocarse, y que procede el amparo que Olivera solicita por violacion de la garantía expresada del referido art. 5º constitucional.

La circular núm. 7 del gobierno del Estado, que cita el C. Gefe político de Tlacolula en su informe, no tiene ni puede tener aplicacion en el caso. Las garantías constitucionales no se suspenden por resoluciones de los gobiernos de los Estados, sino solamente por el presidente de la República, de acuerdo con el consejo de ministros y con aprobacion del Congreso general, y en los recesos de este, de la diputacion permanente, en los términos del art. 29 del Pacto Fundamental de la nacion.

Fundado en lo expuesto, el Ministerio fiscal concluye pidiendo: que se conceda al C. Agustín Olivera, el amparo que solicita.

Oaxaca de Juarez, Diciembre 14 de 1872.

Es copia de su original que obra en el juicio respectivo á que me remito.

Oaxaca, Diciembre 14 de 1872.—*José María Ballesteros.*

SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

Oaxaca de Juarez, Diciembre 17 de 1872.—Visto el presente juicio promovido por el C. Agustín Olivera, solicitando amparo y proteccion contra la